

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación: 05001310500720190060201
Proceso: Ordinario
Demandante: CRISTINA MARIA CARDONA MARULANDA
Demandado: AFP PORVENIR, AFP COLFONDOS, COLPENSIONES
M. P. MARIA PATRICIA YEPES GARCIA SL TSM
Fecha de fallo: 19 de agosto de 2022
Decisión: Confirma, modifica, adiciona y revoca.

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 22 de agosto de 2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, diecinueve (19) de agosto de dos mil veintidós (2022)

DEMANDANTE	CRISTINA MARÍA CARDONA MARULANDA
DEMANDADAS	COLPENSIONES, PORVENIR S.A. y COLFONDOS S.A.
ORIGEN	Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín
RADICADO	05001-31-05-007-2019-00602-01
TEMAS	Ineficacia de traslado de régimen pensional
CONOCIMIENTO	Consulta y apelación
ASUNTO	Sentencia de segunda instancia

En la fecha señalada, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del art. 13 de la Ley 2213 de 2022 profiere sentencia escrita, dentro del proceso ordinario laboral promovido por CRISTINA MARÍA CARDONA MARULANDA contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, PORVENIR S.A. y COLFONDOS S.A.

I. ANTECEDENTES

Hechos y pretensiones de la demanda¹

La señora Cristina María Cardona Marulanda formula demanda contra Colpensiones, Porvenir S.A. y Colfondos S.A., pretendiendo se declare: **i)** la ineficacia de su afiliación al RAIS. En consecuencia de lo anterior se condene a **ii)** Colfondos S.A. y Porvenir S.A. a trasladar a Colpensiones todos los aportes efectuados por la demandante, el saldo de su cuenta de ahorro individual con los respectivos rendimientos indexados; se ordene a **iii)** Colpensiones a aceptar el traslado de la demandante al RPM realizando la consecuente afiliación a le entidad y a recibir todos los aportes de la cuenta de ahorro individual de la actora, con los respectivos rendimientos financieros; y por ultimo **iv)** Costas y agencias en derecho a cargo de las demandadas.

Fundamentó sus pretensiones en que nació el 08 de mayo de 1966. El 09 de agosto de 1999 como consecuencia de una indebida asesoría se trasladó del RPM administrado en ese momento por el extinto Instituto de Seguros Sociales -ISS- al RAIS a través de Colpatria fusionado con la AFP Horizonte -hoy Porvenir S.A.- y posteriormente, el 12 de

¹ Carpeta 01Primera Instancia; Archivo 01 Expediente.pdf, Págs. 7/45

marzo de 2009 se trasladó a Colfondos S.A., donde actualmente se encuentra afiliada; sin que le fuera brindada por parte de las dos AFP una información adecuada, suficiente, clara, comprensible y oportuna

El 10 julio del año 2019, radicó peticiones ante Colpensiones y Colfondos S.A. solicitando autorización para trasladarse al RPM, las cuales fueron despachadas desfavorablemente.

Oposición a las pretensiones de la demanda

Colpensiones y Porvenir S.A., se opusieron a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, así:

i) Colpensiones²

Las pretensiones carecen de fundamentación fáctica y legal, por cuanto se trata de un traslado de régimen pensional realizado voluntariamente por la demandante. Adicionalmente, la actora se encuentra cobijada por el principio de autorresponsabilidad de los hechos que afirma y por ende esta llamada a aportar pruebas tendientes a demostrar que el traslado fue producto de la falta de información; así mismo, Colpensiones no tiene responsabilidad alguna con las consecuencias derivadas del traslado, pues el cambio de régimen fue realizado con pleno conocimiento materializado en la firma del formulario de afiliación al RAIS del cual no se puede predicar coacción o error a la hora de perfeccionar el negocio jurídico, razón por la cual no le asiste la obligación de recibir los aportes realizados por la demandante a otro fondo de pensiones cuando su afiliación es totalmente válida.

Excepcionó: inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir, buena fe, prescripción, imposibilidad de condena en costas, innominada o genérica.

ii) Porvenir S.A.³

La afiliación realizada por la demandante en el año 1999, fue producto de una decisión libre, voluntaria e informada, tal como se aprecia en el formulario de vinculación, documento público en el que se observa la declaración escrita a que se refiere el artículo 114 de la Ley 100 de 1993, el cual se presume auténtico en los términos de los artículos 243 y 244 del CGP y el parágrafo del artículo 54 A del CPT. Por otro lado, indica que la actora se encuentra inmersa dentro de la restricción contenida en el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003. Manifiesta que, en caso de que sea condenada la AFP, no hay lugar a trasladar los gastos de administración, por cuanto fueron causados de tracto sucesivo, al administrar la cuenta de ahorro individual de cada afiliado. Adicionalmente, señala que, la Superintendencia Financiera de Colombia, en concepto con radicación No. 20191522169-003-000 del 17 de enero de 2000, indicó en forma expresa que, en los eventos de proceder la nulidad o ineficacia del traslado, las únicas sumas a retornar son: los aportes y rendimientos de la cuenta individual del afiliado, sin que proceda la devolución de la Prima de Seguro Provisional en consideración a que la compañía aseguradora cumplió con el deber

² Carpeta 01PrimerInstancia; Archivo 01 Expediente.pdf, Págs. 223/245

³ Carpeta 01PrimerInstancia; Archivo 02 Contestación Porvenir.pdf, Págs. 1/25

contractual de mantener la cobertura durante la vigencia de la póliza, ni tampoco la comisión de administración.

Excepcionó: prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación, compensación y la que denominó “genérica”.

por su parte **Colfondos S.A.**⁴ en el escrito de contestación de la demanda, se allanó frente a la prosperidad de las declaraciones y condenas en las que se involucre a la AFP, en lo que respecta a la declaratoria de nulidad y/o ineficacia del traslado de la demandante a Colfondos S.A., por lo tanto, no formuló excepciones de mérito.

Sentencia de primera instancia⁵

El 31 de enero de 2022, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia declarando la ineficacia del traslado efectuado por la demandante del RPM al RAIS administrado por Colpatria hoy Porvenir S.A., y de los traslados realizados en el mismo régimen con Colfondos S.A. y declaró que la demandante se encuentra válidamente afiliada a Colpensiones. Condenó a Colfondos S.A. a trasladar dentro los treinta (30) días posteriores a la ejecutoria de la presente providencia, los dineros de la cuenta de ahorro individual de la demandante y los aportes al FGPM con sus respectivos rendimientos financieros, con destino a Colpensiones, excepto las cuotas de administración y las sumas que hubiesen sido destinadas al pago de seguros previsionales para los riesgos de invalidez y muerte. Condenó a Colpensiones a validar la afiliación de la demandante y a recibir la devolución de los dineros, además de tener en cuenta el tiempo cotizado por la demandante en el RAIS, como semanas cotizadas que deberán reflejarse en su historia laboral. Declaró no probadas las excepciones propuestas por las codemandadas, salvo la excepción de imposibilidad de condena en costas propuesta por Colpensiones y declaró de oficio probada la excepción de inexistencia de la obligación de devolver el seguro previsional y las cuotas de administración a favor de Porvenir S.A. y Colfondos S.A. Condenó en costas a Porvenir S.A., fijando agencias en derecho en la suma equivalente a 2 SMLMV (\$2.000.000) en favor del demandante.

Para fundamentar lo decidido, la juez de primera instancia acudió al precedente judicial vigente en la materia y señaló que, a las demandadas les correspondía demostrar el cumplimiento de su deber de información en forma eficiente, eficaz, completa, oportuna y comprensible antes de la suscripción del formulario de afiliación, carga probatoria que no satisfizo con el interrogatorio de parte, ni con los documentos aportados al proceso, declarando en consecuencia la ineficacia de traslado de régimen pensional.

Recurso de apelación:

i) Porvenir S.A. Inconforme con lo decidido en la primera instancia, solicitó se revoque parcialmente lo decidido respecto de la declaratoria de ineficacia y la condena en costas, toda vez que el artículo 167 del Código General del Proceso establece que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho según las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Adicionalmente, el formulario de afiliación no es un documento al que

⁴ Carpeta 01PrimeraInstancia; Archivo 04 SubsanciondelContestaciondelademanda – CRISTINA MARIA CARDONA MARULANDA contra COLFONDOS S.A.pdf, Págs. 1/5

⁵ Carpeta01PrimeraInstancia; archivo 19 ActaAudienciaArt77Y80CPTSS (OF2).pdf

pueda restársele valor probatorio, en razón a que surge del cumplimiento de la Ley 100 de 1993, a ello se ajustó el obrar de la AFP, no se probó dolo en el acto de afiliación, y el hecho de que la demandante haya permitido los descuentos con destino al fondo privado, que haya generado un traslado horizontal dentro de las AFP, son pruebas suficientes para demostrar la validez de la afiliación a Colpatria en el año de 1999. añade que la demandante se encuentra inmersa dentro de la prohibición legal que consagra la ley 797 de 2003, norma que fue sometida a control previo constitucional y conforme a la sentencia C-1024 de 2004 fue declarada exequible previniendo aspectos de interés general sobre el particular con la protección del Sistema General de Pensiones, la no descapitalización del RPM y el principio de estabilidad financiera del RAIS, por lo que no es dable que la demandante se excuse en una supuesta falta de información, únicamente por meras aspiraciones económicas.

ii) Colpensiones. Solicita en caso de ser confirmada la decisión de primera instancia, se modifique la sentencia en el sentido de ordenar a las AFP codemandadas trasladar el 100% de las cotizaciones realizadas por la demandante sin descuento alguno, esto es que, además de los aportes, rendimientos, Fondo de Pensión de Garantía Mínima, se traslade el valor de las cuotas de administración y seguro previsional por el tiempo que la demandante estuvo afiliada a dichas administradoras, conforme al precedente la SCL de la H. Corte Suprema de justicia.

Alegatos de conclusión en segunda instancia

Solo Porvenir S.A. y Colpensiones, descorrieron oportunamente el traslado otorgado para alegar en esta sede, así:

Porvenir S.A.⁶ Solicita revocar en su integridad la sentencia de primera instancia, alegando que no se acreditó la existencia de vicio alguno en el consentimiento, toda vez que no se alegó ni se probó ninguna de las causales previstas en el artículo 1741 del código civil, y en consecuencia tal acto de traslado es eficaz.

De otro lado, tampoco es posible alegar la ineficacia del traslado que determina el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, pues este establece que la persona natural o jurídica que atente contra la libre elección del afiliado se hará acreedora de una multa administrativa impuesta por el Ministerio de Trabajo, quedando sin efectos la afiliación; supuesto que no se aproxima a lo establecido en los artículo 1740 y siguientes del Código Civil, no siendo posible aplicar diferentes normas para resolver un asunto en concreto, dado el principio de inescindibilidad de las normas.

Ahora, no se puede desconocer que Porvenir S.A le garantizó el derecho de retracto a la demandante, conducta que se prueba con la publicación que se realizó en el diario El Tiempo el 14 de enero de 2004, e igualmente no puede perderse de vista que se aportó los documentos necesarios para demostrar el cumplimiento del deber de información, con lo cual debe darse por satisfecha la carga procesal impuesta.

En el hipotético evento de no considerar que el negocio jurídico tuvo plena validez, no puede olvidarse que, de conformidad con el literal B del artículo 113 de la Ley 100 de 1993,

⁶ 02SegundaInstancia, archivo 03AlegatosPorvenir.pdf

los dineros que se deben trasladar cuando existe cambio de régimen son: el saldo de la cuenta de ahorro individual y los rendimientos, por cuanto ningún otro valor está destinado a financiar la prestación del afiliado; De manera que condenar a pagar valores adicionales configuraría un enriquecimiento sin causa en favor de Colpensiones. Situación que además fue reiterada por la Superintendencia Financiera de Colombia en concepto de radicación No. 20191522169-003-000 del 17 de enero de 2020.

Por su parte **Colpensiones**⁷ solicita se revoque la sentencia de primera instancia, por haberse acreditado el ejercicio del derecho de la demandante a elegir libremente a cuál régimen quería pertenecer, tal y como lo indica el literal 3 de la ley 100 de 1993, modificado por la ley 797 de 2003. en esa libertad de escogencia es fundamental el consentimiento libre que debe asistir al usuario de la seguridad social, hecho que sin lugar a dudas quedó acreditado en el presente caso. Se está desconociendo que el deber de información que tienen las administradoras de pensiones, ha tenido varias etapas, así las cosas, el análisis de la información suministrada por las AFP y el alcance de la asesoría que debió brindar al momento de la afiliación para el caso concreto, deben ser valoradas bajo la normatividad vigente para la fecha de suscripción del contrato o de la materialización del traslado, esto es, para el año 2000. indica que, también existen deberes en cabeza de los afiliados destacándose que, el silencio en el transcurso del tiempo se entenderá como una decisión consciente de permanecer en el Régimen seleccionado; por tanto, la obligación de información no recae exclusivamente en las AFP, es deber del Consumidor Financiero asesorarse de la mejor manera posible para tomar una adecuada decisión.

Resalta que la ineficacia o nulidad, es inoponible frente a terceros de buena fe como en este caso lo es Colpensiones, a la par que la figura de la inoponibilidad constituye un mecanismo protector del derecho a la seguridad jurídica, y se consolida por el tiempo en que aquellos afiliados permanecieron en el RAIS, además que la seguridad jurídica derivada de la inoponibilidad pretende proteger intereses patrimoniales de terceros, que en este caso, tienen alcance frente al principio de sostenibilidad financiera del sistema y planeación de la reserva pensional. Solicita que de confirmarse la decisión, se ordene a la AFP Porvenir que traslade a Colpensiones el valor del 100% del aporte realizado por la demandante, esto es, que además de los aportes, rendimientos y el valor del descuento al fondo de pensión de garantía mínima, traslade también los valores descontados por cuotas de seguro previsional y todos los gastos de administración a que hubo lugar durante el tiempo en que la demandante ha estado afiliada a dicha administradora, sumas que deberán ser debidamente indexadas.

II. SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

La competencia de la Sala está dada por los artículos 66, 66A del CPTSS, respecto de los puntos objeto de apelación. Igualmente se surte el grado jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones conforme al artículo 69 del CPTSS modificado por la Ley 1149 de 2007, y en acatamiento de la decisión de la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, en sentencia de radicado 7382 de 2015.

⁷ 02SegundaInstancia, archivo 04AlegatosColpensiones.pdf

Examinados los hechos y pretensiones de la demanda, así como la oposición formulada por las demandadas, y los argumentos de la decisión de primera instancia, interpreta la Sala, que el **problema jurídico** a resolver se circunscribe a determinar: **a)** la viabilidad de declarar o no la ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS; de ser procedente dicha declaratoria, se precisarán, **b)** las consecuencias de dicha declaración, como el que su afiliación al RPM se considere sin solución de continuidad, así como lo concerniente a los conceptos que deben trasladarse desde la AFP del RAIS hacia Colpensiones.

Lo anterior, dado que el fundamento fáctico de las pretensiones de la demanda es el incumplimiento del deber legal de información por parte de las administradoras, lo que al tenor del artículo 271 de la Ley 100 de 1993, ocasionaría no la nulidad, si no la ineficacia del acto jurídico.

Hechos relevantes acreditados documentalmente

Cristina María Cardona Marulanda nació el 08 de mayo 1966⁸. Inicialmente se afilió al extinto ISS el 31 de octubre de 1984⁹. El 09 de agosto de 1999 suscribió traslado con destino a Pensiones y Cesantías Colpatria, fusionada con Horizonte -hoy Porvenir S. A.¹⁰. Posteriormente, el 12 de marzo de 2009 se trasladó hacia Colfondos S.A.¹¹. Para el 22 de abril de 2019 contaba con 887, 71 semanas cotizadas en toda su vida laboral¹². El 10 de julio de 2019 solicitó a Colpensiones¹³ y Colfondos S.A.¹⁴, autorizar su traslado al RPM, obteniendo respuesta negativa por parte de las mismas. Por su parte Colpensiones negó la solicitud de nulidad de traslado por encontrarse a 10 años o menos del requisito de tiempo para pensionarse¹⁵ y Colfondos S.A. por no cumplir con la normatividad establecida en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003¹⁶.

a) Viabilidad de declarar o no la ineficacia de la afiliación del demandante al RAIS.

Con la finalidad de determinar la eficacia o ineficacia de la afiliación al RAIS por parte de la demandante, es menester acudir a los siguientes preceptos normativos que regulan la materia:

i) Los artículos 48, 53, 335¹⁷ y demás normas concordantes de la Constitución Política; ii) La Ley 100 de 1993 en sus artículos 1¹⁸, 3, 4, 10, 12, 13 literal b, Inciso 3º del Literal c) del artículo 60, 90, 97, 271; iii) Artículo 4 y demás normas concordantes del Decreto 656

⁸ Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 01 Expediente.pdf, Pág. 129/131

⁹ Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 01 Expediente.pdf, Pág. 109

¹⁰ Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 01 Expediente.pdf, Pág. 57; 02 Contestación Porvenir.pdf, Pág. 60

¹¹ Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 01 Expediente.pdf, Págs. 87y 126; 04 Subsanacionde laContestaciondelademanda – CRISTINA MARIA CARDONA MARULANDA contra COLFONDOS S.A.pdf, Pág. 6

¹² Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 01 Expediente.pdf, Pág. 92

¹³ Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 01 Expediente.pdf, Pág. 115

¹⁴ Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 01 Expediente.pdf, Pág. 119

¹⁵ Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 01 Expediente.pdf, Pág. 117

¹⁶ Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 01 Expediente.pdf, Págs. 123/125

¹⁷ Las actividades que desarrollan las AFP al tenor del **artículo 335 de la CN.**, son de interés público y su ejercicio está reglamentado por la ley, debido a la función que desempeñan.

¹⁸ Consagró el artículo primero de esa ley 100, como objeto del aludido sistema: *garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad “para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afectan.”*

de 1994¹⁹; iv) Decreto 692 de 1994; v) El Decreto 663 de 1993, cuyo artículo 72 en su literal f) adicionado por el art. 12 de la Ley 795 de 2003, contiene prohibiciones expresas²⁰ para las entidades del sector financiero entre ellas las AFP; y vi) los arts. 4, 10, 12 y demás concordantes del Decreto 720 de 1994²¹.

Adicionalmente es pertinente hacer un breve recuento de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, que estructura el tema, y está contenida en las sentencias 31314 y 31989 de 2008; 33083 de 2011; 12136 y 46292 de 2014; SL9519 de 2015; 47125, SL19447 y SL17595 de 2017; SL3496 y SL4989 de 2018; SL1421, SL1452, SL1688, SL4360 y SL4426 de 2019; STL 3716, STL4001, STL4084, SL2877, SL4811 de 2020, y SL1217, SL782 de 2021, basada en la necesidad de determinar si en cada asunto concreto, la AFP receptora de la afiliación satisfizo tanto para ese momento, como durante la vigencia de la relación con quien demanda la ineficacia, la obligación consagrada en el numeral 1.º del artículo 97 del Decreto 663 de 1993, aplicable a las AFP desde su creación, de *“suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen”*. No pudiéndose predicar como sostiene la pasiva, ni la Superintendencia Financiera que, la existencia del deber de asesoría, solo se originó desde la expedición de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015.

Advierte esa alta Corporación de Justicia sobre la necesidad de que la decisión del traslado de Régimen esté precedida de toda información relevante que el Fondo de pensiones proporcione a quien pretenda afiliarse, la cual, debe ser suficiente, completa y clara sobre las implicaciones que le conllevaría dejar el anterior Régimen y sus posibles consecuencias futuras. Pues, conforme al Estatuto Financiero de la época en los Artículos 97 y siguientes, consagró que las administradas debían obrar no solo conforme a la ley, sino soportadas en los principios que orientan la buena fe en las que se sancionaba la falta de información relevante.

Más adelante la Corte Suprema de Justicia precisó que son deberes de las administradoras de pensiones, los siguientes:

¹⁹ Conforme al **artículo 4** y demás normas concordantes del **Decreto 656 de 1994**, las administradoras se sitúan en el ámbito de la **responsabilidad profesional**, que **las obliga a prestar de manera eficiente, eficaz y oportuna los servicios** inherentes a la calidad de instituciones de carácter previsional, considerados idóneos por sus conocimientos técnicos especializados y experiencia en compleja materia financiera, para garantizar derechos de sus asegurados; tal responsabilidad se mide con mayor rigor que el utilizado frente a las obligaciones entre particulares, en razón a la delegación del servicio público de seguridad social en pensiones que asumen en el RAIS, sostiene la SCL de la H. Corte Suprema

²⁰ **Se les prohíbe: “No suministrar la información razonable o adecuada que a juicio de la Superintendencia Bancaria deba entregarse al público, a los usuarios o a los clientes de las entidades vigiladas para que éstos puedan tomar decisiones debidamente informadas y puedan conocer cabalmente el alcance de sus derechos y obligaciones en las relaciones contractuales que los vinculan o puedan llegar a vincular con aquellas”.**

²¹ Norma reglamentaria de los arts. 105 y parcialmente del 287 de la ley 100 de 1993 en cuanto al régimen de promoción y de responsabilidad de las sociedades AFP. disponiendo en el inciso final del artículo 4: QUE LAS ACTUACIONES DE LOS VENDEDORES EN EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD OBLIGAN A LAS AFP, respecto de la cual se hubiere promovido la respectiva vinculación, es decir, comprometen la responsabilidad de éstas como establece su art. 10 y precisa en el art. 12 que tales promotores deben suministrar suficiente, amplia y oportuna información a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante la vinculación, y con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado.

- (i) Brindar información en todas las etapas del proceso de afiliación, desde la antesala hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional.
- (ii) La información debe ser completa y comprensible. y,
- (iii) La información debe proporcionarse con prudencia, teniendo obligación de buen consejo, que puede llevar incluso a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.

Si bien los precedentes judiciales tenidos en cuenta por esta Sala corresponden a afiliados beneficiarios del régimen de transición, las razones que sustentan la ineficacia del traslado no tienen en cuenta esa circunstancia, por ser determinante en ello, la falta de información al afiliado.

Múltiples Salas de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín han considerado que, si bien los casos concretos abordados por la H. Corte Suprema de Justicia, refieren a personas que fueron beneficiarias del régimen de transición pensional consagrado en el art. 36 de la Ley 100/93, su *ratio decidendi* aplica para quienes se afilian al Sistema Pensional por primera vez o se trasladan entre regímenes en el marco del mismo, enfatizando en la necesidad de demostrar en cada proceso si la AFP suministró, a quien una vez fuera su potencial afiliado, *información clara, completa, suficiente*, en términos de transparencia y eficiencia, a fin de poder concluirse que la decisión adoptada entonces, obedeció a un conocimiento diáfano y preciso, no sólo de lo que se hacía, sino de las consecuencias que se derivarían de la suscripción del formulario de afiliación correspondiente y que por tanto, ese acto jurídico surgió de una real manifestación de voluntad, libre, espontánea y sin presiones.

Lo anterior, tal y como reitera la CSJ en sentencias SL 1688-2019 y 373 de 2020, que radica en la AFP el deber de brindar una información oportuna y adecuada, ello, indiferentemente de si se tiene o no beneficio transicional o si se está próximo a adquirir requisitos para pensionarse, “dado que la omisión al deber de información se predica frente a la validez o no del acto jurídico de traslado.”

Por estas razones, lo argumentado por la pasiva en torno a que la suscripción del formulario acredita la libre, voluntaria e informada manifestación de voluntad del afiliado al momento del traslado o que debe desatenderse la línea jurisprudencial en materia de carga probatoria en asuntos como el que nos ocupa, no constituyen razones atendibles para exonerar del cumplimiento de sus obligaciones a la Administradora, menos aún, por cuanto, en los asuntos como el presente, no se discute la capacidad jurídica de los celebrantes, ni la licitud de los traslados; se atiende es al hecho de haberse dado el traslado de régimen pensional sin que estuviese precedido de la satisfacción del cumplimiento del deber de información por parte de la administradora que captó a la afiliada, quien, según sus dichos al absolver el interrogatorio de parte, no recibió asesoría previa a suscribir el traslado y solo le indicaron que debía trasladarse a un fondo privado porque el ISS se iba a acabar.

Sobre la carga dinámica de la prueba, ha de indicarse que ésta radica en cabeza de las AFP que a través de sus agentes propiciaron el traslado de régimen del asegurado, tal y

como se aprecia en la sentencia SL4426-2019, donde la Corte expone los motivos por los cuales las administradoras deben demostrar que suministraron una información clara y transparente, lo que se explica desde la premisa que el afiliado presenta una afirmación indeterminada *-la de que no recibió información-* y es la AFP a quien corresponde demostrar que cumplió con sus deberes en esa materia, al hallarse en mejor posición de ilustrarlo, por cuanto debe conservar en sus archivos la documentación que soporta el traslado, además, de estar facultado el fallador por el **artículo 167 del Código General del Proceso**, para distribuir la carga de la prueba a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar todo los elementos de convicción tendientes a esclarecer el objeto del litigio y en asuntos como el que hoy nos ocupa, sin duda quien debe cumplir dicha carga es la AFP del RAIS, por cuanto: **i) Maneja la carpeta con la historia de cada afiliado, así como la información que le fue brindada al momento del trascendental acto del traslado o afiliación, y la que se le haya entregado a lo largo de su permanencia en el fondo**, dirigida a orientarlo sobre las mejores opciones para que tome las decisiones que más le convengan; **ii) Conoce y posee los datos de ubicación y preparación que recibió el asesor** que tuvo a cargo la asesoría efectuada al afiliado y posibilitó que éste firmara el acto jurídico de vinculación o de traslado al fondo de pensiones.

En el sublite, mediante la prueba documental arribada, se evidencia que Cristina María Cardona Marulanda nació el 08 de mayo 1966²², por lo que, al 01 de abril 1994, cuando inició vigencia el SGSSP para ella, tenía 27 años, no reunía 15 o más años de servicios y/o cotizaciones, por ende, nunca fue beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El 09 de agosto de 1999 suscribió traslado con destino a Pensiones y Cesantías Colpatria, fusionada con Horizonte -hoy Porvenir S. A.²³, el cual se acusa de ineficaz. Posteriormente, el 12 de marzo de 2009 se trasladó hacia Colfondos S.A.²⁴. El 10 de julio de 2019 solicitó a Colpensiones²⁵ y Colfondos S.A.²⁶, autorizar su traslado al RPM, peticiones resueltas desfavorablemente por ambas entidades²⁷.

Igualmente fue recaudado interrogatorio al demandante, sin que se produjera confesión de su parte, pues en torno a las condiciones presentadas durante su traslado hacia el RAIS, manifestó que se trasladó a Colpatria --hoy Porvenir S.A.- con ocasión a una visita por parte de un asesor de la AFP, quien les indicó que debían trasladarse a un fondo privado, porque el ISS se iba a acabar y las personas más jóvenes no tendrían la posibilidad de pensionarse con dicha entidad. Frente a su traslado con Colfondos S.A., indicó que afilió con dicha AFP, porque no recibió una buena atención por parte de Porvenir S.A. al momento de retirar sus cesantías, sin embargo, nunca le dieron algún tipo de información.

²² Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 01 Expediente.pdf, Pág. 129/131

²³ Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 01 Expediente.pdf, Pág. 57; 02 Contestación Porvenir.pdf, Pág. 60

²⁴ Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 01 Expediente.pdf, Págs. 87y 126; 04 Subsanacionde laContestaciondelademanda – CRISTINA MARIA CARDONA MARULANDA contra COLFONDOS S.A.pdf, Pág. 6

²⁵ Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 01 Expediente.pdf, Pág. 115

²⁶ Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 01 Expediente.pdf, Pág. 119

²⁷ Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 01 Expediente.pdf, Pág. 117 y 123/125

En este caso, la AFP Porvenir S.A., como encargada de tramitar el traslado de régimen pensional, estaba llamada a demostrar que ese traslado no se vio afectado en su eficacia por haberle suministrado la información suficiente, clara, completa a la entonces potencial afiliada, sin embargo no acreditó la satisfacción de su ineludible deber legal de brindar a la hoy demandante una oportuna información adecuada, suficiente, cierta y comprensible, en términos de transparencia y eficiencia respecto de la vinculación en los dos regímenes pensionales; ni sobre los beneficios e inconvenientes que le generaría el suscribirse a un régimen o a otro, y en general, las consecuencias del tal afiliación, entre ellas, las modalidades de la pensión, el capital necesario para acceder a la pensión de vejez de manera ordinaria, o anticipada, los componentes y variables para establecer el monto de la prestación económica en el RAIS y su comparativo en el RPM, los requisitos para heredar el capital de la cuenta de ahorro individual en caso de fallecimiento, el derecho de retracto, las implicaciones de la negociación anticipada del bono pensional, la posibilidad e incluso la necesidad de hacer cotizaciones adicionales, para obtener la prestación de vejez en el RAIS, entre otros aspectos relevantes, para generar en el posible afiliado, verdadero consentimiento plenamente informado y por tanto, libre y voluntario en la selección o traslado de régimen de pensiones, y ese deber de información es exigible en cada etapa de la afiliación y ejecución del acto jurídico, como bien ha aclarado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

De ello no se aportaron elementos de convicción en el plenario distintos del formulario de afiliación en ésta, sobre el cual la AFP Porvenir S.A. adujo que, estando suscrito por la demandante, quien lo hizo de manera libre y voluntaria, no es dable restarle valor y menos desconocer este acto; sin embargo, en este sentido, las sub reglas establecidas por la Alta Corporación definen que al momento de analizar si resulta procedente declarar la ineficacia de la afiliación: **a)** no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; **b)** en los términos del artículo 1604 del Código Civil corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones **allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados**, en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional. conforme al **artículo 1604 del Código Civil**, la prueba de la diligencia y cuidado recae en quien debió emplearlo y, ello no se satisface solo con allegar documentos previamente elaborados en los que se limita a llenar espacios en blanco, que suscriben las partes, sino con la evidencia real de que la información plasmada atienda las pautas para que se adopte una decisión completamente libre, y que la asesoría brindada fue suficiente para la persona. Lo cual, es acorde con lo normado en **los artículos 97 y 98 del Estatuto Financiero vigente en 1994**, referidos a la debida diligencia que debían emplear las AFP, según los cuales, no se trata sólo de completar un formato, ni adherir a una cláusula genérica, sino de haber transmitido elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, sea que estuviere o no la persona en transición.

Los considerandos de esta providencia también sustentan que los actos del demandante posteriores al traslado, como su prolongado silencio, o el sufragar aportes, fueron indicadores de su intención de pertenecer al Régimen de Ahorro Individual, debiendo recordarse el reiterado precedente de la Sala de Casación Laboral, según el cual, el debate probatorio en los asuntos de ineficacia de traslado se encamina a establecer si, con

anterioridad y al momento del acto de traslado, se cumplió el tantas veces nombrado deber de información, **sin considerar los actos posteriores que el afiliado pudiese realizar, pues** la jurisprudencia del órgano de cierre en materia de seguridad social ha dilucidado de manera uniforme que, si la debida asesoría no se brinda con anterioridad y/o al momento de la materialización del traslado, al no cumplir su propósito de generar consentimiento informado para el acto de traslado, se equipara a la ausencia de información (**SL1688-2019, SL2877-2020, SL2937-2021, SL3349-2021**), y adicionalmente, esa falta de información en esta materia, no se convalida por los traslados de administradoras dentro del Régimen de Ahorro Individual (SL3199- 2021).

De ahí que, no procede adoptar el criterio aislado contenido en la providencia **SL2440-2021**²⁸, donde una de las Salas de Descongestión de la CSJ., expuso la tesis de los llamados “actos de relacionamiento,” que valga anotar, había formulado la Sala de Casación Laboral permanente en la SL413-2018, en un proceso donde se debatía el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, y fue necesario analizar la voluntad de permanencia del afiliado en un específico régimen pensional, por cuanto no resultaba diáfano a cuál de los regímenes pertenecía, litigio notoriamente ajeno a los asuntos de ineficacia de traslado de régimen pensional.

Conforme al precedente en cita, acogido por esta Sala, el incumplimiento de las mencionadas obligaciones de información por parte de Porvenir S.A., vulneradora de la libre y voluntaria selección de régimen prevista en el literal b del Artículo 13 de la ley 100 de 1993²⁹ genera consecuentemente la INEFICACIA DE LA AFILIACIÓN AL RAIS, como repuesta jurídica a la transgresión de ese deber legal y ello implica que, el acto jurídico declarado ineficaz carezca de vida jurídica, y, por tanto no produzca ningún efecto, lo cual fue precisado en **sentencia SL4360 de 2019**, concluyendo en que: “la sanción impuesta en el artículo 271³⁰ de la Ley 100 de 1993 consagra una ineficacia en sentido estricto, lo que conlleva que la consecuencia allí contenida es la exclusión de todo efecto al traslado”, lo cual, da lugar a garantizar el derecho del accionante a retornar al Régimen de Prima Media con Prestación Definida hoy administrado por COLPENSIONES y a declarar que ha permanecido afiliada, sin solución de continuidad, lo que conlleva a la reactivación de su respectiva afiliación en este último régimen.

Adicionalmente, deviene innecesario analizar las condiciones de afiliación Colfondos S.A., pues la ineficacia del traslado de régimen afecta de contera la posterior migración entre administradoras.

²⁸ por la Sala de Descongestión No. 4 de la Sala de Casación Laboral

²⁹ **13. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES.** El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características:

b. La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley.

³⁰ El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud¹ en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador. El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos para el control del pago de cotizaciones de los trabajadores migrantes o estacionales, con contrato a término fijo o con contrato por prestación de servicios.

Tales motivaciones permiten **confirmar** en ese aspecto la sentencia conocida en apelación y consulta.

b) Consecuencias económicas de la declaratoria de ineficacia

Atendiendo al principio de sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005, con el fin de que COLPENSIONES cuente con los recursos necesarios, y fundamentalmente se garantice la no afectación financiera del régimen de prima media, y pueda satisfacer las prestaciones que se generen a su cargo, producto de la declaratoria de ineficacia, todos los recursos recibidos con motivo de la afiliación al régimen de Ahorro Individual, deben trasladarse a la administradora que tendrá a su cargo el reconocimiento de las eventuales pensiones, por cuanto, tales sumas repercutirán en la conformación del derecho pensional, dado que el RPM es un fondo común al cual ingresan de forma indistinta los recursos de todos los afiliados y que a través del sistema de reparto intergeneracional se cubren las prestaciones causadas. Además de ser menester que, por efecto de la declaratoria de la ineficacia en asuntos como el abordado en este proceso, la parte beneficiada económicamente con el acto ineficaz por omisión del deber de información garantice que el patrimonio de la persona inducida a la afiliación no sufra deterioro, y pueda disfrutar de las prestaciones del RPM, como si hubiera permanecido en él, como ha dilucidado el precedente jurisprudencial de la H CSJ en SCL., que esta Sala acoge.

Bajo las referidas premisas, se **confirmarán, modificarán y adicionarán** las órdenes impartidas desde la primera instancia a **COLFONDOS S.A. -AFP a la que actualmente se encuentra afiliada la actora-**, en el sentido que ésta AFP del RAIS, dentro de los **30 días siguientes a la ejecutoria** de la presente providencia, no solo debe trasladar a COLPENSIONES **la totalidad** de las sumas que se encuentran depositadas en la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros que se han generado durante todo el tiempo en que la hoy demandante figuró como afiliada al RAIS.

Sino que Porvenir S.A., también debe trasladar a la referida AFP del RPM, las cuotas de administración, el dinero con destino al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y las sumas adicionales de las aseguradoras, por ella descontadas durante el periodo de afiliación de la hoy demandante, pues no se discute la legalidad de tales descuentos, ni, si el dinero del afiliado fue administrado adecuada y eficientemente, sino que, como consecuencia de la ineficacia del traslado inicial al RAIS, y por no haberse estudiado previamente a la afiliación de la situación particular del hoy demandante, e ignorándose verdaderamente cuáles fueron los argumentos esgrimidos por dicha AFP para aseverar que cumplió con los deberes de información que sostiene haberle dado, no es pertinente exonerarla de la devolución de tales conceptos, independientemente de que Colpensiones no haya administrado el dinero del afiliado, ni asumido los riesgos que esa actividad conlleva, no pudiendo discutir inexistencia de motivos para entregarlos, detrimento patrimonial, ni enriquecimiento sin causa para Colpensiones y el demandante, tampoco transgrede derechos de las demandadas, por evidenciarse la omisión de asesoría completa y previa a la migración del accionante hacia el RAIS y dentro de ese mismo régimen, pues si bien existió una administración por parte de la AFP del RAIS, además del pago de seguros, consecuencialmente a la declaratoria de ineficacia, todos los

recursos deben trasladarse a Colpensiones, administradora que tendrá a su cargo el reconocimiento de la pensión que se genere en favor de la hoy demandante, como anteriormente se explicó.

Porvenir S.A., además deberá responder por la devolución de lo descontado por cuotas o gastos de administración durante el tiempo de afiliación de la demandante ante Pensiones y Cesantías Colpatria -fusionada con Horizonte S.A.-. En este aspecto se adiciona la decisión de primera instancia, dado que, en virtud de la fusión presentada por esa AFP con Porvenir S.A., al celebrar el referido negocio jurídico, se subroga tanto en derecho, como en obligaciones respecto de sus afiliados, y debe protegerse el equilibrio financiero del RPM.

Se rememora que, para efecto de la devolución de conceptos hacia el RPM, con anterioridad, esta Sala de Decisión disponía que, el monto trasladado no fuese inferior al valor total del aporte legal correspondiente en caso de que el afiliado hubiere permanecido en el régimen de prima media y si así fuere, la AFP asumiera el pago de la diferencia, aplicando el precedente de la Corte Constitucional plasmado en las sentencias **C 1024 de 2004**, y en las **SU 062 de 2010** y **SU 130 de 2013** sobre los casos de las personas que regresan del RAIS al RPM, **y de otro lado**, y se abstenía de ordenar que las AFP del RAIS remitieran con destino a Colpensiones, los valores correspondientes a las sumas adicionales de las aseguradoras, tema que forma parte del recurso de apelación, ante las órdenes impartidas en la primera instancia que aquí se confirma.

Pero, retomando el punto, y por las mismas razones expuestas en este acápite, considerando el precedente de la Sala de Casación Laboral³¹ contenido en sentencias **SL 3202-2021, SL 2769-2021, SL3708-2021, SL 3710-2021- SL 3706-2021, SL 3571-2021 y SL 3709-2021**, esta Sala ha precisado que las cuotas de administración y los descuentos del seguro previsional, descontadas por la AFP del RAIS durante el periodo de afiliación de hoy demandante en ella, se deben trasladar debidamente **indexadas** y con cargo a sus propios recursos, aspecto en el cual, se adicionará la decisión de instancia, con el fin de que se satisfagan en su valor actualizado, dado que la pérdida de poder adquisitivo de la moneda colombiana constituye un hecho notorio.

Por lo expuesto, no se acogerá el **Concepto del 17 de enero de 2020 emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia**, a la luz del artículo 28 del CPACA³², ante consulta realizada por la Vicepresidente Jurídica de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías -ASOFONDOS-, interpretando

³¹ Esta Sala atiende el precedente judicial original de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a partir la sentencia con radicado 31989 de 2008 y dando aplicación al artículo 1746 del Código Civil, en los cuales fundamentan la *ratio decidendi* de estos procesos, donde esa Alta Corporación determinó que por efecto de la entonces denominada nulidad, hoy ineficacia, generada con ocasión del actuar negligente de las AFP del RAIS, en materia de información, éstas se encuentran obligadas a remitir a Colpensiones no sólo las cotizaciones, rendimientos, si los hubiere, cuotas o gastos de administración, lo destinado a garantía de pensión mínima sino también las sumas adicionales de la aseguradora, por tanto, se adopta en estricto sentido lo decidido por nuestro órgano de cierre en la materia, ordenando a Colfondos S.A., que traslade a Colpensiones, los valores descontados a la demandante durante el tiempo de su afiliación en ella, por concepto de aportes para la Garantía de Pensión Mínima, y con cargo a sus propios recursos, sumas adicionales de las aseguradoras, además de las comisiones de administración.

³² “**ARTÍCULO 28. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS.** <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución.”

que para determinar los recursos a trasladar con motivo de la declaratoria judicial de nulidad o ineficacia de traslado de régimen debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 7° del Decreto 3995 de 2008³³, toda vez que dicha norma fue expedida para efectos de traslado en asuntos referentes a multiafiliación, situación que no corresponde a la aquí ventilada y adicionalmente, tal concepto no obliga, pues se encuentra decantado por el órgano de cierre judicial en materia laboral y de seguridad social que los gastos administración y prima de seguro previsional deben retornar a Colpensiones como consecuencia de la ineficacia declarada.

Al momento de cumplirse esta sentencia, los conceptos deberán aparecer detallados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

En consecuencia, las órdenes impartidas desde la primera instancia, se **CONFIRMARÁN, MODIFICARÁN Y ADICIONARÁN** como se dijo, y se reitera, deberán cumplirse dentro de los **30 días siguientes a la ejecutoria** de la presente providencia.

El cumplimiento de tales órdenes será verificado por COLPENSIONES, de manera coordinada ambas AFPs del RAIS sin trasladar consecuencias negativas a la actora.

Se ordenará a COLPENSIONES recibir de PORVENIR S.A. y COLFONDOS S.A., los recursos correspondientes a los conceptos aludidos, y se homologarán en el régimen de prima media las semanas cotizadas por la actora durante su afiliación en el RAIS.

En este sentido se **confirmará, modificará, adicionará** la sentencia conocida en apelación y consulta.

III. EXCEPCIONES

En grado jurisdiccional de consulta se estudian, además, las excepciones formuladas por la pasiva, las cuales quedan implícitamente resueltas, por haberse causado lo pretendido en la demanda.

En especial, no operó la prescripción pues la ineficacia no está sometida a dicha figura, por conllevar la inexistencia del acto jurídico sobre el que recae y el reconocimiento pensional se presentó como una de las consecuencias del retorno al RPM administrado

³³ **Decreto 3395 de 2008** ARTÍCULO 1o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. <Artículo compilado en el artículo 2.2.2.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1833 de 2016> Las disposiciones contenidas en el presente decreto se aplican a los afiliados al Sistema General de Pensiones que al 31 de diciembre de 2007, se encuentren incursos en situación de múltiple vinculación entre el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el de Ahorro Individual con Solidaridad y señala algunas normas de traslados de afiliados, recursos e información.

A las personas que, después de un año de entrada en vigencia la Ley 797 de 2003, se trasladaron al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) faltándoles 10 años o menos para tener la edad exigida para tener derecho a la pensión en este régimen, se les aplicará lo que establecen los artículos 7o, 8o y 12 del presente decreto

por Colpensiones, además esta Sala, acoge la postura pacífica de la H. Corte Suprema de Justicia, respecto a que las acciones judiciales tendientes a comprobar la forma en que ocurrió un hecho o se reconozca un estado jurídico, son imprescriptibles, como es el caso de la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales.

Finalmente, se tiene que el Juez A Quo declaró probada la excepción inexistencia de la obligación de devolver el seguro previsional y las cuotas de administración, la cual debe **revocarse**, en razón a que, en consecuencia, de la declaratoria de ineficacia, todos los recursos deben trasladarse a Colpensiones, administradora que tendrá a su cargo el reconocimiento de la pensión que se genere en favor de la demandante.

IV. COSTAS

Costas en esta instancia a cargo de Porvenir S.A por haber resultado vencida en su recurso. Se fijan agencias en derecho en el equivalente a 1 SMLMV en 2022, y en favor del demandante. Lo anterior a tenor de lo dispuesto en el artículo 365 del CGP.

V. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín el 31 de enero de 2022, dentro del proceso ordinario laboral de doble instancia promovido por la señora **CRISTINA MARÍA CARDONA MARULANDA** contra COLPENSIONES, PORVENIR S.A. y COLFONDOS S.A. **excepto** en cuanto declaró probada de oficio la excepción de Inexistencia de la obligación de devolver el seguro previsional y las cuotas de administración a favor de las AFP Porvenir Y AFP Colfondos. **Por tanto, dicha providencia se modifica y adiciona** en el sentido de que:

COLFONDOS debe trasladar hacia COLPENSIONES, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, con destino al fondo del RPM **la totalidad** de las sumas que se encuentran depositadas en la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros generados durante la totalidad del tiempo en que la referida demandante ha figurado como afiliada en el RAIS.

Además, PORVENIR S.A. y COLFONDOS S.A. deben trasladar a Colpensiones los valores descontados a la actora por concepto de aportes para la garantía de pensión mínima y con cargo a sus propios recursos, trasladarán debidamente indexados el valor de comisiones de administración y primas de seguros descontados en todo el tiempo en que dicha demandante figuró como afiliada en cada una de ellas. Adicionalmente PORVENIR S.A. devolverá los referidos conceptos descontados durante el tiempo de

afiliación de la demandante ante Pensiones y Cesantías Colpatria -fusionada con Horizonte S.A.-.

El cumplimiento de lo ordenado será verificado por COLPENSIONES, de manera coordinada con COLFONDOS S.A., PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A.

Se ordena a COLPENSIONES recibir de las demandadas del RAIS los recursos correspondientes a los conceptos aludidos, e incorporar los respectivos aportes pensionales completos en la historia laboral de la demandante como si ésta hubiera permanecido en el RPM.

SEGUNDO: REVOCAR el numeral SEXTO de la referida providencia, en cuanto declaró probada la excepción de *inexistencia de la obligación de devolver el seguro previsional y las cuotas de administración*.

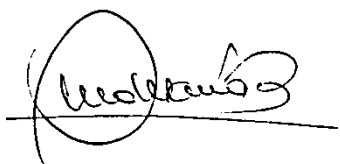
TERCERO: Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. Agencias en derecho en el equivalente a 1 SMLMV en 2022.

Se ordena notificar lo resuelto por edicto.

Los Magistrados,



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN